



Dirección General de Infancia,
Familia y Fomento de la Natalidad

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y
POLÍTICA SOCIAL

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “GESTIÓN DE DOS CENTROS PARA EL ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE ADOLESCENTES ATENDIDOS, CON CARGO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD (2 LOTES)”

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), la necesidad de celebración de este contrato se justifica atendiendo a las siguientes consideraciones:

• Marco normativo.

El presente contrato se rige por la siguiente normativa, que justifica la competencia que ejerce este centro directivo para el cumplimiento de su objeto:

- La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, encomienda la tutela, guarda y acogimiento de menores a la Entidad Pública que en el respectivo territorio tenga a su cargo la protección de menores, habiéndose atribuido, en el caso de la Comunidad de Madrid, dichas funciones a la Consejería de Integración Social (en la actualidad Consejería de Políticas Sociales y Familia) mediante Decreto 49/88, del Consejo de Gobierno de dicha Comunidad.

Así mismo, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, establece los principios rectores de la acción de las Administraciones Públicas en materia de infancia exige a las Entidades Públicas competentes la adecuada regulación, autorización, inspección y supervisión de las instituciones que acojan menores de edad.

Esta Ley Orgánica, destaca como principio rector de la actuación de los poderes públicos **la supremacía del interés del menor**.

- La Ley Orgánica 8/2015, de 22 de Julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, desarrolla y refuerza el derecho del menor a que su interés superior sea prioritario, dotando de contenido al citado concepto.
- La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, tiene como objeto introducir los cambios necesarios en la legislación española de protección a la infancia y la adolescencia, que permitan continuar garantizando a los menores una protección uniforme en todo el territorio nacional, introduciendo una mejora en los instrumentos de protección jurídica, en aras del cumplimiento efectivo del artículo 39 de la Constitución Española, que establece la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y, en especial, de los menores de edad.

Por su parte, el artículo primero, apartado nueve, se refiere a los supuestos de “**Atención Inmediata**” estableciendo que “las autoridades y servicios públicos tendrán la obligación de prestar la atención inmediata que precise cualquier menor, de actuar si corresponde a su ámbito de competencias o de dar traslado en otro caso, al órgano competente y de poner los hechos en conocimiento de los representantes legales del menor o, cuando sea necesario, de la Entidad Pública y del Ministerio Fiscal.

Hemos de tener en cuenta, por tanto, que, atendiendo a la legislación internacional y nacional, no existe la posibilidad de establecer listas de espera para este perfil concreto de población, debiéndose garantizar su atención inmediata.

- La **Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia**, cuyo objeto es garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de protección integral, que incluyan la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida.
- La **Ley 4/2023, de 22 de marzo, de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid**, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 27 de marzo de 2023 y que entrará en vigor a los veinte días de su publicación.

En esta ley se sigue estableciendo como primer principio de actuación el interés superior del niño como principio fundamental, en todas las políticas, acciones y decisiones que le puedan afectar individual o colectivamente, en el ámbito público o en el privado, ya sean adoptadas por las instituciones públicas, privadas o las familias, conforme a lo previsto en el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

- La Ley 12/2022, de 21 de diciembre, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.
- El Estatuto de las Residencias de Atención a la Infancia y la Adolescencia, aprobado por Decreto 88/1998, de 21 de mayo, exige a las Residencias el desarrollo de las funciones de educación, y cuidado y promoción de la salud de los residentes (artículo 5), debiendo programar y desarrollar la vida cotidiana del Centro, diseñar, realizar y evaluar periódicamente el Proyecto Individual de cada menor, dar a los cuidados y atenciones a las necesidades básicas de los niños un profundo sentido educativo y afectivo (artículo 6) y facilitar la reincorporación familiar del menor o, en los casos en que ésta resulte imposible, promover la alternativa familiar más adecuada.

En consonancia con el marco normativo antes expuesto, la Comunidad de Madrid es la Entidad Pública responsable de las competencias en materia de menores, dentro de su ámbito territorial, conforme al **artículo 148.1 de la Constitución Española** que atribuye a las CCAA la facultad de asumir competencias en materia de asistencia social, junto con lo dispuesto en el **artículo 10.3 de Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, en su redacción dada por el artículo primero, apartado cinco de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y la Ley 6/1995 de Garantías y Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid**.

La Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad (en adelante, DGIFFN), asume las competencias, en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, en materia de protección de los menores en situación de desamparo y con ello a través de la Comisión de Tutela, se adoptan las medidas de protección necesarias para su guarda.

Los menores con medidas de protección de Guarda o de Tutela acordadas por la Comisión de Tutela del Menor están acogidos por la DGIFFN en Centros Residenciales que, bien son propios y son gestionados directamente por la DGIFFN, o bien son contratados y están gestionados por Entidades.

Los menores atendidos por cuenta de la DGIFFN se ajustarán al siguiente perfil:

- a) Edad: de 13 a 17 años (hasta el día inmediatamente anterior al cumplimiento de los 18 años).
- b) Masculino y femenino.
- c) Con medida de protección adoptada por la Comunidad de Madrid.
- d) Los menores pueden presentar, en algún caso, dificultades y/o problemas relacionados con las vivencias que han motivado la adopción de la medida de protección: desajustes emocionales, problemas de índole relacional, discapacidad cuyo grado no impida su integración en el centro, etc.

Estos menores se encuentran en la difícil etapa de la adolescencia y en estos recursos se trabaja intensamente para preparar al joven para vivir de forma independiente, lo que requiere la promoción de habilidades que le capaciten para vivir de la forma más autónoma posible antes de que se produzca la salida del centro, en muchas ocasiones sin apoyo familiar alguno, así como su inserción socio-laboral.

En la cláusula III del Pliego de Prescripciones Técnicas se contempla el detalle de todas las prestaciones que conlleva, acentuando determinados elementos en el proceso de intervención, especialmente los que tienen que ver con el Área de Autonomía y Responsabilidad, el Área de Documentación, de Inserción Socio-Laboral y el Contrato de Ahorro Económico, por lo que el objeto es completo y se relaciona directamente tanto con las competencias a ejercer por la Comunidad de Madrid como por las necesidades sociales a cubrir.

Al hilo de esta argumentación, conviene remarcar los siguientes extremos relativos al contrato:

- Se trata de los únicos recursos de acogimiento residencial destinados a adolescentes existentes en sus respectivas zonas, tanto Tres Cantos como Rivas-Vaciamadrid
- Son recursos esenciales dado el perfil de los menores destinatarios del servicio, esto es, adolescentes sobre los que se adopta una medida de protección.

Los menores residentes en ambos centros están integrados en los centros educativos de la zona, donde están también sus actividades de ocio y relaciones personales, por lo que es prioritario mantener la continuidad de ambos recursos para no trasladar a los menores de su lugar de residencia alejándolos de su entorno formativo y social, con interrupción de su proyecto de autonomía y de sus referentes educativos, fundamentales en su evolución.

Por todo ello, teniendo en cuenta la normativa vigente y la actual situación de demanda de atención a menores, se hace necesario ofrecer una solución ágil y duradera que dé respuesta a esta necesidad social y la solución viene por la convocatoria de una licitación para la gestión de los dos centros, con una capacidad total de 28 plazas y que son propiedad de la Administración, que los destina a esta finalidad.

La formalización del contrato con las características propuestas presenta importantes ventajas, en concreto:

Respecto a la prestación del servicio.

- Se da al recurso, como prestación que conlleva prestaciones directas a favor de la ciudadanía, cierta estabilidad dentro del marco de la LCSP, **con una duración de dos años prorrogables por otros dos, que no pudo articularse anteriormente por este período de ejecución.**

Respecto al presupuesto de licitación.

- El presupuesto de licitación del contrato tiene su base en los precios de contratos realizados recientemente para plazas de acogimiento residencial de menores con medida de protección y en todo caso, conforme al precio real del mercado y en la línea de diversos contratos licitados recientemente.
- Se considera que el presupuesto de licitación está equilibrado respecto al precio real de mercado de las plazas de acogimiento residencial, lo que permitirá obtener una mayor concurrencia a efectos de su adjudicación.

Con el objeto del presente contrato se están cumpliendo los principios que rigen la contratación pública, fundamentalmente, los principios de igualdad y no discriminación, transparencia, publicidad y libre concurrencia.

Por todo ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la LCSP, se propone la tramitación de un contrato de servicios para la gestión de dos centros para el acogimiento residencial de adolescentes atendidos, con cargo a la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad (2 LOTES), por procedimiento abierto.

En Madrid, a la fecha de la firma

**LA DIRECTORA GENERAL DE INFANCIA, FAMILIA
Y FOMENTO DE LA NATALIDAD**

Firmado digitalmente por: VALMAÑA OCHAITA SILVIA
Fecha: 2023.03.27 15:55

Fdo.: Silvia Valmaña Ochaíta